

308-2006



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CERTIFICA; que en el proceso contencioso administrativo promovido por el Licenciado Luis Alfonso Valle Deras, como Apoderado de la Sociedad **COMMERCE GROUP CORP.** contra el **MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**, se encuentra la sentencia definitiva que literalmente DICE:

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas cincuenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil diez.

El presente juicio ha sido promovido por la sociedad **Commerce Group Corp.**, por medio de su apoderado general judicial, licenciado Luis Alfonso Valle Deras, impugnando de ilegal:

Resolución MARN 3026-783-2006 de fecha seis de julio de dos mil seis, notificada a las quince horas con cinco minutos del trece de septiembre del mismo año, en la cual se revocó la Resolución MARN-No 493-2002 de fecha veintiuno de octubre del año dos mil dos. La Resolución MARN-No 493-2002 otorgó permiso ambiental a **Commerce Group Corpor.**, para desarrollar el proyecto de explotación de la Mina de Oro San Sebastián ubicado en el Cerro San Sebastián al noroeste de Santa Rosa de Lima, en el Departamento de La Unión.

Ha intervenido en el juicio: la parte actora en los términos señalados, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales como autoridad demandada y la licenciada Ana Cecilia Galindo Santamaría, en calidad de delegada y en representación del Fiscal General de la República, quien posteriormente es sustituida por la licenciada Mirna Mercedes Flores Quijada.

I. CONSIDERANDOS

A. ANTECEDENTES DE HECHOS.

ALEGATOS DE LAS PARTES

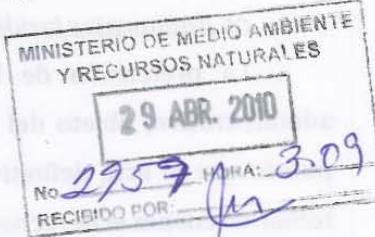
1. DEMANDA.

a) Autoridad demandada y acto impugnado:

La sociedad **Commerce Group Corp.**, dirige su pretensión contra el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales por considerar ilegal el acto descrito en el preámbulo de esta sentencia.

b) Circunstancias:

Manifiesta la parte demandante, que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, revocó el permiso ambiental MARN No 493-2002 sin seguir los lineamientos y principios legales correspondientes según artículos 12 de la Constitución; 88 y 93 de la Ley del Medio Ambiente. Además la demandante observa, que la resolución MARN No 493-2002, había sido revocada el cuatro de



enero de dos mil seis, por la resolución 3026-003-2006 la cual creaba un nuevo permiso.

Dentro de los alegatos pronunciados por la parte demandante se encuentran: falta de fundamentación legal de la resolución que impugna, por basarse esta únicamente en una auditoría ambiental que se practicó el veintitrés de junio de dos mil seis, sin haberse producido los supuestos establecidos en el artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente y sin practicar procedimiento que le garantizara su defensa.

Sobre la auditoría practicada, la parte demandante expone que en el acta se estableció que la empresa no había cumplido con ciertos requisitos de mitigación requeridos en el permiso ambiental; sobre lo cual explica, que no existió incumplimiento debido a que el proyecto no había continuado desde la fecha en que se emitió la resolución 3026-003-2006 del cuatro de enero de dos mil seis, la cual concedía un plazo de tres años para cumplir con las medidas ambientales propuestas. La demandante respalda su argumento con lo establecido en la misma acta en la que se observó que no se había iniciado la explotación del material aurífero, por lo tanto no pudo haberse causado ningún daño que violara la Ley del Medio Ambiente.

Además de lo antes relacionado, la sociedad demandante considera que la autoridad demandada actuó con exceso de autoridad, debido a que: dentro de la ley se establecen claramente las infracciones y las sanciones a aplicar y en ninguna de éstas se contempla la revocatoria del permiso ambiental y la orden de cierre de la empresa, competencia que corresponde al Ministerio de Economía.

c) Argumentos jurídicos de la pretensión

La pretensión de la parte actora se fundamenta en que en el acto administrativo, objeto del litigio, se omitieron las garantías del debido proceso; puesto que el acto definitivo se basó únicamente en la auditoría practicada, sin tomar en cuenta el derecho de defensa de la actora en un debido proceso.

Adicionalmente considera, que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, infringió el principio de legalidad al sancionar a la sociedad actora por medio de la revocatoria del permiso ambiental, sin ser esta una sanción prescrita por la ley y por ordenar en el mismo acto, el cierre del funcionamiento de la empresa, sin ser la autoridad competente para ello.

d. Petición

La sociedad demandante pide se declare la ilegalidad del acto impugnado.

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.



Se tuvo por parte a la sociedad Commerce Group Corp., por medio de su apoderado general judicial licenciado Luis Alfonso Valle Deras. La parte actora solicitó en la demanda se suspendiera el acto administrativo; sin embargo, por existir de parte de la sociedad salvadoreña un interés difuso en proteger el medio ambiente, se declaró dicha petición no ha lugar. Seguidamente se pidió informe a la autoridad demandada sobre la existencia del acto atribuido.

Al contestar este informe, la autoridad manifestó que no eran ciertos los hechos vertidos por la sociedad actora en la demanda. Se tuvo por parte al señor Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; se tuvo por recibido el expediente administrativo; se le solicitó el informe referido en el art. 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se ordenó notificar la existencia de este proceso al Fiscal General de la República.

3. INFORME DE LA PARTE DEMANDADA.

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó el informe de quince días de manera extemporánea razón por la cual se mandó a oír a la autoridad y al no justificar la extemporaneidad se le impuso multa de la forma relacionada en auto de las once horas treinta minutos del ocho de mayo de dos mil ocho.

4. TÉRMINO DE PRUEBA.

Se le dió intervención a la licenciada Ana Cecilia Galindo Santamaría en su calidad de agente auxiliar delegada por el Fiscal General de la República y se abrió el juicio a prueba por el término legal, del cual únicamente la autoridad demandada hizo uso, presentando copia del permiso ambiental MARN No 493/2002.

5. TRASLADOS

Se corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

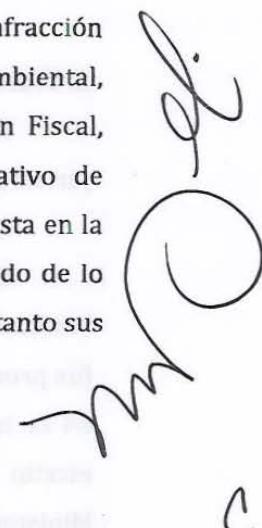
Sobre los alegatos presentados se tuvo el siguiente resultado:

- a) El demandante confirmó lo ya mencionado en la demanda y agrega que la resolución, el acto administrativo mediante el cual se revoca el permiso ambiental, fue pronunciado sin que se cumplieran los presupuestos establecidos en el artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente. A la vez, el demandado presenta fotocopia de escrito emitido el treinta de enero del año dos mil ocho, extendido por el Ministerio de Economía en el cual manifiesta: "Que la Sociedad "Commerce Group

Corporation" y "San Sebastián Gold Mines Inc.", suspendieron operaciones a partir del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y que a partir de esa fecha, dichas Sociedades, únicamente realizaron actividades de mantenimiento y lavado de tanques, las que duraron hasta el treinta y uno de enero del año dos mil. Asimismo le informa que las Sociedad en mención, hasta la fecha no han reportado ningún reinicio de operaciones..."

b) La autoridad demandada presentó sus alegatos en tiempo, exponiendo: Que el permiso ambiental MARN-No 493/2002, permitió se continuara desarrollando el proyecto de explotación de la Mina de Oro San Sebastián y estableció la obligación de cumplir durante el funcionamiento del mismo, con las medidas ambientales así como cumplir con el Programa de Adecuación Ambiental de acuerdo al cronograma del Diagnóstico Ambiental. La autoridad demandada manifiesta que ante el incumplimiento de las medidas resguardadas por el permiso, resultado de la auditoría ambiental, se pronunció resolución MARN-No3026-783-2006 de fecha seis de julio de dos mil seis, que revoca el permiso ambiental pronunciado el veintiuno de octubre de dos mil dos. La autoridad observa que la revocatoria debe estar antecedida por una actuación administrativa como fue el caso de la auditoría de evaluación ambiental y el informe por parte de la Dirección General de Gestión Ambiental, ya que todo permiso ambiental se encuentra sujeto a la verificación del cumplimiento de los requisitos encaminados a prevenir, mitigar, corregir compensar y manejar los efectos ambientales de la actividad, obra o proyecto que se autorizó.

c) La representante del Fiscal General de la República considera que la resolución proveída por la autoridad demandada MARN No 3026-783-2006, fue pronunciada de acuerdo con la Ley del Medio Ambiente, motivada por las auditorías practicadas el veintitrés de noviembre de dos mil cinco y el veintitrés de junio de dos mil seis, las cuales determinan que son causales de infracción ambiental: el incumplimiento a las condiciones fijadas en el permiso ambiental, artículos 86 literal c) de la Ley del Medio Ambiente. La representación Fiscal, considera que la autoridad no ha iniciado procedimiento administrativo de sanción, solamente se ha reservado el derecho de iniciarla tal y como consta en la resolución que se impugna, estimando que la revocatoria se dio, partiendo de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente, acatando por lo tanto sus funciones según ley.



B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1. OBJETO Y LIMITES DE LA PRETENSIÓN.



5

Conforme al art. 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la sentencia que dilucidará el presente conflicto, recaerá únicamente sobre los puntos controvertidos en relación con el acto administrativo impugnado.

De lo establecido en la demanda, la sociedad Commerce Group Corporation pretende se declare ilegal:

Resolución MARN 3026-783-2006 de fecha seis de julio de dos mil seis, notificada a las quince horas con cinco minutos del trece de septiembre del mismo año: en la cual se revocó la Resolución MARN-No 493-2002 de fecha veintiuno de octubre del año dos mil dos. La Resolución MARN-No 493-2002 otorgó, permiso ambiental a Commerce Group Corporation, para desarrollar el proyecto de explotación de la Mina de Oro San Sebastián.

La sociedad actora basa su pretensión en que el acto administrativo que revocó el permiso ambiental MARN-No 493-2002, violentó su derecho de Defensa al no garantizar audiencia previa y el debido proceso y además no se fundamentaba en los supuestos del artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente. La actora considera que el pronunciamiento de la autoridad que ordena el cierre e inhibición de funcionamiento, contradice el principio de legalidad de la autoridad.

2. SOBRE LO OCURRIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA.

La autoridad administrativa ambiental, pronunció acto administrativo por considerar que la omisión de la sociedad Commerce Group Corporation casaba dentro del tipo establecido por el artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente; en base a ello, se ha tenido a la vista el expediente administrativo del cual se desprende que los hechos se desarrollaron de la forma siguiente:

a) El veintiuno de octubre de dos mil dos, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió permiso ambiental, Resolución MARN-No 493-2002, a la sociedad Commerce Group Corporation, como titular del proyecto explotación de Mina de Oro San Sebastián situado en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión.

b) A folio 17 y 18 del proceso contencioso administrativo; y folio 50 y 51 del expediente administrativo, se encuentra anexado el informe de auditoría ambiental practicado por la Gerencia de Auditoría Ambiental, en el se establece que el veintitrés de noviembre de dos mil cinco, se llevó a cabo auditoría al proyecto explotación de Mina de Oro San Blas, ubicado en Cerro San Sebastián, aproximadamente seis kilómetros y medio al noreste de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. En el informe se establece como hallazgos que el proyecto no había iniciado las medidas ambientales establecidas en el cronograma

del permiso MARN 493-2002. Según consta en el informe, una copia del acta de inspección fue entregada a la actora, la cual se encuentra agregada a folio 48 del expediente administrativo.

c) El cuatro de enero de dos mil seis, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronunció resolución MARN No-3026-003-2006 (fs. 14 del proceso contencioso administrativo y folio 54 del expediente administrativo), el cual dentro de otros puntos ordena no liberar la fianza de la sociedad actora.

d) El seis de julio de dos mil seis, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió acto administrativo, resolución 3026-783-2006 (folio 7 a 13 del proceso contencioso administrativo; folios 85 a 89 del expediente administrativo), en la cual, la autoridad demandada revoca el permiso ambiental otorgado a la sociedad actora el veintiuno de octubre de dos mil dos; ordena la clausura del proyecto; ordena a la actora presentar el plan de cierre de operaciones; llevar a cabo un análisis y monitoreo de metales pesados y presentar el plan de monitoreo post-cierre.

En la resolución 3026-783-2006, la autoridad relacionó: el acta e informe de la auditoría ambiental del veintitrés de junio del mismo año y el dictamen técnico de no cumplimiento de las medidas ambientales.

3. ANALISIS DEL CASO.

Uno de los principales pilares dentro de la justicia, es el principio de inocencia en el proceso administrativo, debido al grado de ventaja jerárquica en que se encuentra la Administración Pública, se aplica desde la óptica del principio pro-administrado, por lo tanto corresponde a la Administración desvirtuar a través de diversos medios probatorios la inocencia de este.

Como se estableció en su oportunidad, la sociedad Commerce Group Corporation aportó como prueba documental las actas e informes de folios siete a treinta y uno que acompañaron la demanda y copia de constancia extendida el treinta de enero de dos mil ocho por el Ministerio de Economía en los términos establecidos en la razón librada por el Secretario de esta Sala.

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aportó como prueba certificación del Permiso Ambiental 493-2002 y además como elemento formal del acto presentó el expediente administrativo.

Ambos medios probatorios serán analizados bajo el artículo 265 del Código de Procedimientos Civiles, el cual estima como reconocido un documento cuando éste es presentado dentro del juicio y agregado éste, no se redarguye su legitimidad. Tanto la parte actora como demandada no repudiaron las pruebas



agregadas en tiempo, por lo tanto la valoración de cada una de ellas será tomada en cuenta para emitir el fallo.

a) Partiendo del punto D) literal dos de la demanda, esta Sala considera que es pertinente valorar, en primer lugar, la eficacia del permiso ambiental referencia MARN 493-2002 del veintiuno de octubre del año dos mil dos, ya que la actora alegó que dicho permiso fue revocado y sustituido por la resolución 3026-003-2006 del cuatro de enero de dos mil seis la cual a la vez prorroga el permiso.

La resolución 3026-003-2006, establece en el romano IV numeral siete, que el contenido del permiso ambiental MARN No 493-2002, se mantiene íntegro en lo que no se oponga a la resolución MARN No-3026-003-2006, razón por la cual, al tener a la vista ambos documentos y leer sus diferentes puntos, se determina que la resolución 3026-003-2006 establece: que no se libre fianza por no haberse cumplido las medidas ambientales establecidas en el permiso; que el titular del proyecto cumpla con las medidas que se indicaron en el permiso; ordena nueva fianza y exige se presente un nuevo Programa de Manejo Ambiental para que incluya las medidas ambientales del permiso que no fueron desarrolladas. Es evidente que la última resolución lejos de revocar a la primera, es un complemento del permiso, el cual exige se adopten las medidas que en el fueron indicadas.

Por lo anteriormente relacionado, esta Sala considera que el permiso ambiental 493-2002 era el acto administrativo viable en el momento que se pronunció la resolución que la sociedad actora, pretende impugnar.

b) Como segundo punto a valorar, la sociedad Commerce Group Corp., considera que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales violentó el debido proceso y consecuentemente su derecho de defensa, al revocar el permiso ambiental 3026-783-2006 pronunciado el seis de julio de dos mil seis.

La resolución que se impugna, 3026-783-2006 que acompaña a la demanda de la actora y se encuentra a folio ochenta y cinco a ochenta y nueve del expediente administrativo, revoca el permiso ambiental al valorar la auditoría ambiental practicada el veintitrés de junio de dos mil seis y el dictamen técnico de no cumplimiento de medidas ambientales, emitido por la Dirección General de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según la autoridad, en ambos documentos existe coincidencia en que las medidas ambientales establecidas en el permiso ambiental 493-2002 no fueron acatadas por la sociedad actora.

El acta de la auditoría ambiental practicada el veintitrés de julio de dos mil seis, se encuentra en auto de folio cincuenta y nueve del expediente administrativo; dicha acta fue extendida por el Jefe de Planeamiento y Técnicas del

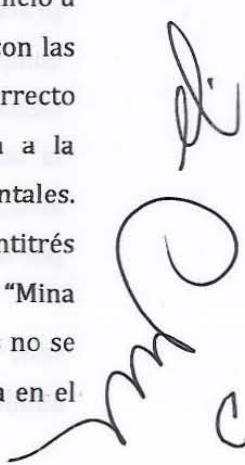
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ella se divide en tres partes, reunión inicial; verificación del cumplimiento y seguimiento de las medidas ambientales propuestas del permiso ambiental, y la reunión de cierre con el auditado; lo anterior concuerda con los requisitos desarrollados por el Reglamento de la Ley del Medio Ambiente, artículo 37.

En el desarrollo de la auditoría ambiental se estableció “...que según permiso MARN 493-2002: *Las medidas Ambientales no se han concluido por encontrarse el proyecto en etapa de preparación y diseño.*”; continua el perito que la representación del titular del proyecto, ingeniero Jaime Arizala expresó en la reunión final, que el proyecto se encuentra paralizado en sus operaciones por encontrarse en una etapa de preparación y diseño. En el informe de dicha auditoría (folio 58 del expediente administrativo) el órgano competente detalla las actividades y acciones a auditar, las cuales son las actividades de adecuación ambiental contenidas en el permiso ambiental 493-2002. Según dicho ente, se informó al representante del proyecto que las medidas establecidas en el permiso MARN 493-2002 no se habían realizado y se le entregó copia del acta levantada.

Relacionado lo anterior, procede valorar si el permiso ambiental fue o no revocado sin el debido proceso y sin garantizar el derecho de defensa de la actora. Pero para ello es importante primero determinar cómo regula la Ley del Medio Ambiente la revocación y como ha sido aplicada ésta por la Administración Ambiental.

Existe una regla general del derecho en que la autoridad no puede autorizar lo que la ley no permita, ni prohibir lo que la ley permite, bajo este vector es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe y tiene que: proteger, conservar, recuperar el medio ambiente y dirigir un uso sostenible de los recursos naturales; para lo cual, goza por mandato de Ley de ciertas potestades sobre la gestión del medio ambiente y sus recursos como: autorizatoria, inspección y vigilancia, revocatoria, sancionadora, etc.

Cuando la Administración concede un permiso ambiental, permite el inicio u operación de actividades, obras o proyectos, y obliga al titular a cumplir con las medidas y condiciones que este establezca. Para garantizar el desempeño correcto del administrado, la ley otorga la potestad de inspección y vigilancia a la Administración la cual, en este caso, se materializa por auditorías ambientales. Como prueba de esta facultad, la Administración Ambiental practicó el veintitrés de noviembre del año dos mil cinco, una auditoría ambiental en el proyecto “Mina de Oro San Sebastián” y se estableció en el acta, que las obras ambientales no se habían iniciado en el proyecto; a la vez se extendió informe de la auditoría en el





que se concluyó, que las actividades y acciones auditadas no estaban conformes con lo establecido en el permiso ambiental.

La resolución 3026-003-2006 del cuatro de enero de dos mil seis, ordena la no liberación de Fianza (numeral 1) por no haberse cumplido las medidas ambientales establecidos en el Permiso Ambiental MARN 493-2002, basándose en la auditoría ambiental practicada el veintitrés de noviembre de dos mil cinco y el informe de la misma. Además la autoridad ambiental se reservaba el derecho de practicar auditorías de evaluación ambiental con el propósito de determinar el cumplimiento de lo establecido en la resolución.

El veintitrés de junio de dos mil seis, se practicó nueva auditoría ambiental de la cual queda constancia en el acta levantada por el auditor así como el informe de la misma, extendida el veintisiete del mismo mes y año. En el acta se hizo constar que las medidas ambientales no habían concluido por encontrarse el proyecto en etapa de preparación; en el informe se expresó que las acciones y actividades auditadas; y las medidas establecidas en el permiso MARN 493-2002 no se habían realizado. El auditor resuelve que las medidas del permiso no se habían acatado.

La resolución impugnada por la sociedad Commerce Group Corp., es el acto administrativo pronunciado el seis de julio del año dos mil seis, referencia MARN 3026-783-2006, que revoca el permiso ambiental y ordena presentar y cumplir el plan de cierre de operaciones. Como bien observa la actora, la Ley del Medio Ambiente regula en el título XIII, capítulo I, el procedimiento Administrativo Sancionatorio el cual no contempla como sanción la figura de la revocatoria, por el simple hecho que la figura de la revocatoria no es una verdadera sanción, a lo mucho puede ser consecuencia de una sanción.

La revocatoria de un permiso ambiental que ha sido legalmente concedido, es el resultado del incumplimiento de las condiciones o requisitos que dicta el mismo. En otras palabras, es por la inobservancia del titular respecto a las condiciones y requisitos que hacen valedero el permiso, que deviene su ineeficacia. La revocatoria "*resulta precisamente porque esas condiciones han variado, de forma voluntaria por el particular, a raíz el incumplimiento en el que el mismo incurre*" (Fortes Martín, Antonio: "Estudio sobre la Revocación de los Actos Administrativos" Revista de Derecho, Valdivia, Vol. XIX No 1, julio 2006, pp 149-177).

Revocar es dejar sin efecto un acto jurídico en que se tenga potestad; la idea manejada por autores, como Sala Arquer, sobre el objetivo de la revocatoria, es el retirar del Ordenamiento Jurídico un acto administrativo existente por considerar que este daña el interés público (Vid. Sala Arquer, J.M.: "*La revocación de los actos*

administrativos en el Derecho español; pp. 183 y 184.); la intención de la revocación, es proteger el bien común, para el caso en particular el del medio ambiente.

Sin embargo, debido al efecto de la revocatoria, la Ley necesita asegurar que la facultad revocatoria de la Administración no incurra en excesos que atenten contra la seguridad jurídica del particular y así no destruir la confianza que se puede tener en el sistema jurídico Salvadoreño. Razón por la cual, la Constitución reconoce la aplicación del debido proceso cuando existe el peligro de perjudicar la esfera jurídica de un individuo.

Entre los principios que tutelan el debido proceso se encuentra el principio de igualdad de las partes dentro del proceso, el cual garantiza una bilateralidad y contradicción en el litigio, esto es, que el proceso se desarrolle, bajo la dirección del juez, entre las dos partes, con idénticas condiciones, para ser oídas y así poder conocer los argumentos de ambas partes (Véscovi, Enrique: "Teoría General del Proceso"; página 54, numeral 4).

La Ley del Medio Ambiente de El Salvador, si bien es cierto establece las razones por las cuales el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede revocar un permiso (artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente), no establece el proceso legal que debe de ser aplicado; empero, toda actuación de una autoridad debe de ser a la luz de la Ley y de la Constitución: el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Ambientales debe y tiene que aplicar los principios mínimos del debido proceso. Es necesario que el proceso administrativo tenga como mínimas garantías: una debida comunicación de los hechos que se investigan; un plazo razonable para que el administrado pueda defenderse; plazo de prueba en el cual las presentadas se comunican al adversario; iguales oportunidades de exponer sus alegatos.

Al analizar el proceso administrativo aplicado por la autoridad demandada esta Sala observa que según el acta del veintitrés de noviembre de dos mil cinco, la auditoría de evaluación ambiental, fue practicada con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley del Medio Ambiente ya relacionado (reunión inicial; verificación del cumplimiento y, seguimiento de las medidas ambientales propuestas del permiso ambiental y la reunión de cierre con el auditado). Dentro de la reunión inicial, se explicó el objetivo de la resolución, una vez concluida la auditoría se le comunicó al auditado los hallazgos de ésta, y se le hizo de su conocimiento por medio del ingeniero representante del proyecto. Se levantó acta, se hizo constar la entrega de ésta al representante y se comunicó en la misma el



plazo de ocho días hábiles para que el titular presentara documentación y aclarara, permitiéndole así impugnara el pronunciamiento del auditor.

La resolución MARN 3026-003-2006, del cuatro de enero de dos mil seis, la cual ya ha sido analizada, fue un comunicado de la Administración en el cual se advertía al titular del proyecto Explotación de Mina de Oro San Sebastián, del incumplimiento de las medidas establecidas en el permiso y de la posibilidad de nuevas auditorías con el propósito de asegurar su cumplimiento.

La auditoría de evaluación ambiental practicada el veintitrés de junio del año dos mil seis, fue desarrollada con el mismo procedimiento de su predecesora, en la cual se hicieron similares observaciones, se comunicó la no conformidad con el permiso ambiental y se consignó en el acta el derecho del titular de presentar documentación y aclaraciones para desvanecer los hallazgos en un plazo de ocho días.

En los tres actos administrativos existe una tutela del debido proceso. Las dos actas de auditoría ambiental que según resolución 3026-003-2006 acompañan a la misma, fueron el medio de comunicación por parte de la autoridad administrativa sobre los hechos investigados; el comunicado hecho en el acta para contradecir los hallazgos y los ocho días de prueba, garantizaron el derecho de defensa de la demandante.

El documento presentado por Commerce Group Corp en esta sede, la cual se encuentra anexada a folio sesenta y siete del proceso contencioso administrativo, fue extendida el treinta de enero del dos mil ocho y dentro del proceso administrativo presentado por la autoridad demandada, no se encuentra intervención alguna de parte de la sociedad demandante, como causa de exclusión para justificar el por qué no hubo cumplimiento con las medidas ambientales, por lo tanto la Administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dicho alegato.

Respecto al plan de cierre de operaciones y rehabilitación: dicho plan es parte del programa de manejo ambiental (Artículo 24 del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente) que a la vez integra el estudio de impacto ambiental. A la luz de los principios de prevención y precautorio, citados y desarrollados en su oportunidad por la autoridad demandada, La Ley del Medio Ambiente en el artículo 21, establece que toda actividad, construcción o proyecto que puede tener impactos considerables o irreversibles en el ambiente salud y bienestar humano o del ecosistema, requieren por mandato de ley un estudio de impacto ambiental.

Según la Ley del Medio Ambiente, el permiso ambiental obliga al titular a realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación,

establecidos en el Programa de Manejo Ambiental (Artículo 20 de la Ley del Medio Ambiente). El plan de cierre y operaciones es parte del proceso de rehabilitación y compensación que la actividad de minería, por el tipo de actividad que es, debe de presentar a la Autoridad.

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cumplió con los principios del debido proceso, previo a la revocatoria del permiso ambiental MARN No 492-2002, al respetar el derecho de audiencia y defensa del administrado. A la vez, la Autoridad demandada en cumplimiento al principio de legalidad, hizo bien en solicitar el plan de cierre de operaciones y rehabilitación, tal y como exige la Ley del Medio Ambiente.

Por estos motivos esta Sala es de la opinión que el acto administrativo MARN 3026-783-2006 pronunciado el seis de julio de dos mil seis por el Ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es un acto legal.

II. FALLO

POR TANTO, con fundamento en lo expuesto y artículos 64 literal a) de la Ley del Medio Ambiente; artículos 421 y 427 del Código de Procedimientos Civiles; 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a nombre de la República, esta Sala **FALLA**:

- a) Declarase legal el acto pronunciado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales el seis de julio de dos mil seis.
- b) Condénase en costas a la sociedad Commerce Group Corporation conforme a Derecho.
- c) En el acto de notificación, entréguese certificación de esta sentencia a las partes y a la representación fiscal.
- e) Oportunamente, devuélvase el expediente administrativo a su oficina de origen.

Notifíquese. Entendidos: al de parte VAL.
 "M. POSADA". ----- "L.C. DE AYALA G.". ----- "M.A. CARDOSA A."
 "E.R. NÚÑEZ". ----- PRONUNCIADA POR LAS
 SEÑORAS MAGISTRADAS Y LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.
 "ILEGIBLE". ----- SECRETARIO. -----

ES CONFORME CON SU ORIGINAL con la cual se confrontó y para entregar al **MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**, se extiende firma y sella la presente CERTIFICACIÓN, constando de seis folios útiles, en la Secretaría de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; San Salvador, a las ocho horas y quince minutos del día veintinueve de abril de dos mil diez.



LIC. MIGUEL ÁNGEL CEDILLOS ARÉVALO

Secretario

Sala de lo Contencioso Administrativo

FULL TRANSLATION

[seal:] Clerk, Administrative Litigation Chamber
Supreme Court of Justice
Republic of El Salvador, San Salvador
[emblem] [initials]

308-2006

THE UNDERSIGNED CLERK OF THE ADMINISTRATIVE LITIGATION CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE CERTIFIES that, in the administrative proceeding filed by Mr. Luis Alfonso Valle Deras as attorney for **COMMERCE GROUP CORP. against the MINISTER OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES**, there is a final decision, which **SAYS**, verbatim:

ADMINISTRATIVE LITIGATION CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE: San Salvador, at 10:50 a.m. on the twenty-sixth of February, two thousand ten.

This action was filed by Commerce Group Corp. through its attorney, Mr. Luis Alfonso Valle Deras, challenging as illegal:

Resolution MARN 3026-783-2006 dated the sixth of July, two thousand six, notice of which was served at 3:05 p.m. on the thirteenth of September of the same year, revoking MARN Resolution No. 493-2002 dated the twenty-first of October, two thousand two. MARN Resolution No. 493-2002 granted an environmental permit to Commerce Group Corp. to carry out the San Sebastián Gold Mine exploitation project in Cerro San Sebastián, northwest of Santa Rosa de Lima, Department of La Unión.

The following participated in the proceeding: plaintiff as described above, the Minister of Environment and Natural Resources as defendant, and Ms. Ana Cecilia Galindo Santamaría as delegate and representative of the Attorney General of the Republic, subsequently replaced by Ms. Mirna Mercedes Flores Quijada.

I. REASONS

A. FACTUAL BACKGROUND

THE PARTIES' SUBMISSIONS

[stamp:] MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
NATURAL RESOURCES
Apr. 29, 2010
No. 2957 TIME: 3:09
RECEIVED BY: [initials]

1. COMPLAINT.

a) Authority sued and challenged act:

Commerce Group Corp. is filing suit against the Minister of Environment and Natural Resources because it believes that the act described in the introduction of this decision is illegal.

b) Circumstances:

Plaintiff asserts that the Minister of Environment and Natural Resources revoked MARN environmental permit No. 493-2002 without following the corresponding guidelines and legal principles pursuant to article 12 of the Constitution and articles 88 and 93 of the Environmental Law. Plaintiff also notes that MARN Resolution No. 493-2002 had been revoked on the

fourth of January, two thousand six by resolution 3026-003-2006, which created a new permit.

Plaintiff's allegations include: lack of legal basis of the challenged resolution, inasmuch as it is based only on an environmental audit carried out on the twenty-third of June, two thousand six, in the absence of the circumstances provided for in article 64 of the Environmental Law and without implementation of the procedure that would guarantee its defense.

Regarding the audit that was performed, plaintiff asserts that the record established that the company had not complied with certain mitigation requirements specified in the environmental permit. On this point, plaintiff explains that there was no non-compliance because the project had not continued since issuance of resolution 3026-003-2006 dated the fourth of January, two thousand six, which granted a period of three years for compliance with the proposed environmental measures. Plaintiff supports its argument with that which was established in the same act, which noted that exploitation of gold-bearing material had not been initiated; consequently there could not have been any damage that would violate the Environmental Law.

Also, plaintiff believes that the defendant exceeded its authority, because: the law clearly establishes the infractions and applicable penalties and none of these include revocation of the environmental permit and order to close the business, authority for which corresponds to the Ministry of Economy.

c) Legal arguments of the claim

Plaintiff's claim is based on the grounds that the administrative act which is the object of the litigation failed to comply with the guarantees of due process, since the definitive act was based only on the audit, without considering the plaintiff's right to defense in due process.

Plaintiff also considers that the Minister of Environment and Natural Resources violated the principle of legality when it penalized plaintiff by revoking the environmental permit, this not being a penalty prescribed by the law, and ordered, in the same act, closure of the company's operation, which it does not have authority to do.

d. Request

Plaintiff requests that the challenged act be declared illegal.

2. ADMISSION OF THE COMPLAINT.

[initials]

[seal:] Clerk, Administrative Litigation Chamber
Supreme Court of Justice
Republic of El Salvador, San Salvador
[emblem] [initials]

Commerce Group Corp. was considered a party, through its attorney, Mr. Luis Alfonso Valle Deras. In the complaint, plaintiff requested suspension of the administrative act; however, because within Salvadoran society there is widespread interest in protecting the environment, that request was rejected. Thereafter, a report was requested from the defendant regarding the existence of the challenged act.

In answering this report, the defendant asserted that the facts put forth by the plaintiff in the complaint were not true. The Minister of Environment and Natural Resources was considered a party; the administrative file was received; the report mentioned in article 24 of the Administrative Jurisdiction Law was requested, and it was ordered that the Attorney General of the Republic be notified of this proceeding's existence.

3. DEFENDANT'S REPORT.

The Minister of Environment and Natural Resources submitted the 15-day report late, for which it was given a chance to be heard and, since it did not justify its lateness it was fined as indicated in the case file at 11:30 a.m. on the eighth of May, two thousand eight.

4. EVIDENTIARY PERIOD.

Ana Cecilia Galindo Santamaría participated as adjunct agent delegated by the Attorney General of the Republic, and the evidentiary period was opened pursuant to law, and only the defendant made use of such period, submitting a copy of environmental permit MARN No. 493/2002.

5. NOTIFICATION.

Notification was carried out as provided for by article 28 of the Administrative Jurisdiction Law.

Regarding the allegations presented, the results were as follows:

a) Plaintiff repeated what was already mentioned in the complaint and adds that the resolution, the administrative act which revoked the environmental permit, was issued without complying with the conditions established in article 64 of the Environmental Law. In turn, the defendant *[sic]* submits a photocopy of the document issued on the thirtieth of January, two thousand eight, by the Ministry of Economy, which states: "*Commerce Group*

Corporation" and "San Sebastian Gold Mines Inc." suspended operations in December of nineteen ninety-nine and, as of that date, said Companies performed only activities for maintenance and washing of tanks, which continued until the thirty-first of January, two thousand. Also, the aforementioned companies have not reported any resumption of operations to date..."

b) The defendant presented its arguments within the proper time period, stating: That MARN environmental permit No. 493/2002 allowed continuation of the San Sebastian Gold Mine exploitation project and established the obligation of complying, during its operation, with the environmental measures and complying with the Environmental Improvement Program in accordance with the Environmental Assessment timetable. The defendant states that, in view of the non-compliance with the measures set forth in the permit, as a result of the environmental audit, MARN Resolution No. 3026-783-2006 dated the sixth of July, two thousand six was issued, revoking the environmental permit issued on the twenty-first of October, two thousand two. The authority notes that the revocation must be preceded by an administrative act, as was the case of the environmental assessment audit and the report of the General Bureau of Environmental Management, since every environmental permit is subject to verification of compliance with the requirements aimed at preventing, mitigating, correcting, compensating for, and managing the environmental impacts of the authorized activity, work, or project.

c) The representative of the Attorney General of the Republic considers that the resolution issued by the defendant, MARN No. 3026-783-2006, was issued in accordance with the Environmental Law as a result of the audits carried out on the twenty-third of November, two thousand five and the twenty-third of June, two thousand six, which established the following environmental infractions: non-compliance with the conditions established in the environmental permit, article 86 c) of the Environmental Law. The Office of the Attorney General considers that the authority has not initiated an administrative procedure for penalty, but has merely reserved the right to initiate it, as is a matter of record in the challenged resolution, deeming the revocation, based on the provisions of article 64 of the Environmental Law, issued in accordance with its legal authorities.

B. LEGAL GROUNDS.

1. OBJECT AND LIMITS OF THE CLAIM.

[initials]

[seal:] Clerk, Administrative Litigation Chamber
Supreme Court of Justice
Republic of El Salvador, San Salvador
[emblem] [initials]

In accordance with art. 32 of the Administrative Jurisdiction Law, the decision in this dispute shall be based only on the disputed points in relation to the challenged administrative act.

From what is established in the complaint, Commerce Group Corporation is seeking a declaration of illegality of:

MARN Resolution 3026-783-2006 dated the sixth of July, two thousand six, notice of which was served at 3:05 p.m. on September thirteenth, two thousand six. This resolution revoked MARN Resolution No. 493-2002 dated the twenty-first of October, two thousand two. MARN Resolution No. 493-2002 granted an environmental permit to Commerce Group Corporation to carry out the San Sebastian Gold Mine exploitation project.

Plaintiff bases its claim on the fact that the act which revoked MARN environmental permit No. 493-2002 violated its right to Defense inasmuch as it did not guarantee a prior hearing and due process and, moreover, was not grounded in the circumstances set forth in article 64 of the Environmental Law. Plaintiff believes that the ruling of the authority ordering closure and cessation of operation violates the authority's principle of legality.

2. ADMINISTRATIVE AUTHORITY ACTIONS.

The environmental administrative authority issued an administrative act because it believed that Commerce Group Corporation's omission was a circumstance established by article 64 of the Environmental Law; based on that, the administrative file was reviewed, and indicates that the facts developed as follows:

a) On the twenty-first of October, two thousand two, the Minister of Environment and Natural Resources issued an environmental permit, MARN Resolution No. 493-2002, to Commerce Group Corporation as owner of the San Sebastian Gold Mine exploitation project, located in Santa Rosa de Lima, Department of La Unión.

b) At pages 17 and 18 of the record of this proceeding, and pages 50 and 51 of the administrative file, we find the report of the environmental audit carried out by the Environment Audit Management Office, establishing that on the twenty-third of November of two thousand five, an audit was conducted of the San Blas Gold Mine exploitation project, located in Cerro San Sebastián, approximately six and a half kilometers northeast of Santa Rosa de Lima, Department of La Unión. The report's findings establish that the project had not initiated the environmental measures set out in the

MARN 493-2002 permit timetable. According to the report, a copy of the inspection certificate was provided to plaintiff; it is attached at page 48 of the administrative file.

c) On the fourth of January, two thousand six, the Minister of Environment and Natural Resources issued MARN Resolution No. 3026-003-2006 (p. 14 of this proceeding and page 54 of the administrative file) which, among other things, orders that the plaintiff's bond not be released.

d) On the sixth of July, two thousand six, the Minister of Environment and Natural Resources issued an administrative act, resolution 3026-783-2006 (pages 7–13 of the record of this proceeding; pages 85–89 of the administrative file), wherein the defendant revokes the environmental permit granted to the plaintiff on the twenty-first of October, two thousand two, orders closure of the project, orders the plaintiff to submit the plan for termination of operations, to carry out an analysis and monitoring of heavy metals, and to submit the post-termination monitoring plan.

In resolution 3026-783-2006, the authority set forth: the certificate and report of environmental audit carried out on the twenty-third of June, two thousand six, and the technical report of non-compliance with the environmental measures.

3. ANALYSIS OF THE CASE.

A basic principle of justice is that of innocence in the administrative proceeding, due to the hierarchical advantage of Public Administration; it is applied from the standpoint of the "pro-plaintiff" principle; consequently the Government must disprove through various kinds of evidence the innocence of the other party.

As established at the proper time, Commerce Group Corporation submitted as documentary evidence the certificates and reports at pages seven to thirty-one, which they attached to the complaint, and a copy of certification issued on the thirtieth of January, two thousand eight by the Ministry of Economy under the terms established in the explanation issued by the Clerk of this Court.

The Minister of Environment and Natural Resources submitted as evidence certification of Environmental Permit 493-2002 and, as formal evidence of the act, submitted the administrative file.

Both submissions shall be analyzed under article 265 of the Code of Civil Procedure, which considers a document to be recognized when it is submitted in and associated with the proceeding and its legitimacy is not countered. Neither plaintiff nor defendant repudiated the evidence

[initials]

[seal:] Clerk, Administrative Litigation Chamber
Supreme Court of Justice
Republic of El Salvador, San Salvador
[emblem] [initials]

submitted within the proper timeframe. Consequently, the assessment of each shall be taken into consideration in reaching the decision.

a) Starting with point D) two of the complaint, this Court considers it appropriate to assess, first of all, the validity of the aforementioned MARN environmental permit 493-2002 dated the twenty-first of October, two thousand two, since plaintiff alleged that said permit was revoked and replaced by resolution 3026-003-2006 dated the fourth of January, two thousand six, which also extends the permit.

Resolution 3026-003-2006 provides, in Roman numeral IV number seven, that the content of MARN environmental permit No. 493-2002 remains intact to the extent that it did not conflict with MARN resolution No. 3026-003-2006, because of which, upon reviewing both documents and reading their different points, it is determined that resolution 3026-003-2006 provides: that the bond is not released because the environmental measures established in the permit have not been complied with, that the owner of the project must comply with the measures specified in the permit; orders a new bond and requires submission of a new Environmental Management Plan to include the environmental measures specified in the permit that were not carried out. It is clear that the latter resolution, far from revoking the former, is a supplement to the permit, which requires adoption of the measures specified therein.

Therefore, this Court considers that environmental permit 493-2002 was the viable administrative act at the time the resolution which plaintiff is trying to challenge was issued.

b) As a second point to be analyzed, Commerce Group Corp. considers that the Minister of Environment and Natural Resources violated due process and, consequently, its right to defense, when it revoked environmental permit 3026-783-2006 dated the sixth of July, two thousand six.

The challenged resolution, 3026-783-2006, attached to plaintiff's complaint and found at pages eighty-five to eighty-nine of the administrative file, revokes the environmental permit, since it considers the environmental audit carried out on the twenty-third of June, two thousand six and the technical report indicating non-compliance with environmental measures issued by the General Bureau of Environmental Management of the Ministry of Environment and Natural Resources. According to the authority, the two documents agree that the environmental measures established in environmental permit 493-2002 were not complied with by the company.

The certificate of the environmental audit carried out on the twenty-third of July [sic], two thousand six is found in the record at page fifty-nine of the administrative file. Said certificate was issued by the Chief of Planning and Technology of the

Ministry of Environment and Natural Resources. It is divided into three parts: initial meeting; verification of compliance and follow-up of the environmental measures proposed in the environmental permit; and final meeting with the audited party. The foregoing is consistent with the requirements set forth in the Regulations of the Environmental Law, Article 37.

The environmental audit established: "...that, pursuant to MARN permit 493-2002: *The Environmental measures have not been completed because the project is in the preparatory and design phase.*" The expert goes on to say that the project representative, Engineer Jaime Arizala, stated at the final meeting that the project's operations are stalled because it is in a preparatory and design phase. In the report of that audit (page 58 of the administrative file), the competent authority specifies the activities and actions to be audited, which are the environmental improvement activities contained in environmental permit 493-2002. According to said entity, the project representative was informed that the measures established in MARN permit 493-2002 had not been carried out, and he was given a copy of the record.

The foregoing having been put forth, it is appropriate to assess whether or not the environmental permit was revoked without due process and without guaranteeing plaintiff's right to defense. But, to do that, it is important to first determine how the Environmental Law governs revocation and how it has been applied by the Environmental Administration.

There is a general rule of law under which the authority cannot authorize what the law does not permit nor prohibit what the law permits. Under this precept, the Ministry of Environment and Natural Resources must and shall: protect, preserve, improve the environment and guide sustainable use of natural resources. To do this, it holds, by legal mandate, certain powers over the management of the environment and its resources, such as: authorization, inspection, and oversight, revocation, penalization, etc.

When the Administration grants an environmental permit, it allows the initiation or operation of activities, works, or projects, and it obligates the holder to comply with the measures and conditions it establishes. To guarantee proper performance by the governed, the law grants the Administration authority to inspect and oversee. In this case, that authority is exercised through environmental audits. As evidence of this authority, the Environmental Administration carried out, on the twenty-third of November, two thousand five, an environmental audit of the "San Sebastian Gold Mine" project and established, in the record, that the environmental work had not been initiated in connection with the project; at the same time it issued the audit report, which

[initials]

[seal:] Clerk, Administrative Litigation Chamber
Supreme Court of Justice
Republic of El Salvador, San Salvador
[emblem] [initials]

concluded that the audited activities and actions were not in accordance with the provisions of the environmental permit.

Resolution 3026-003-2006 dated the fourth of January, two thousand six, orders that the Bond not be released (number 1) because the environmental measures established in MARN Environmental Permit 493-2002 had not been carried out, based on the environmental audit conducted on the twenty-third of November, two thousand five and the report thereof. Also, the environmental authority reserved the right to conduct environmental assessment audits in order to determine compliance with the resolution's provisions.

On the twenty-third of June, two thousand six, another environmental audit was carried out, and documented in the certificate drawn up by the auditor and the report thereof, issued on the twenty-seventh of June, two thousand six. The certificate made it a matter of record that the environmental measures had not been completed because the project was in the preparatory phase; the report said that the audited actions and activities and the measures established in MARN permit 493-2002 had not been carried out. The auditor determined that the measures provided for in the permit had not been complied with.

The resolution challenged by Commerce Group Corp. is the administrative act promulgated on the sixth of July, two thousand six, reference MARN 3026-783-2006, which revokes the environmental permit and orders submission of and compliance with the plan to cease operations. As plaintiff well notes, Title XIII, chapter I of the Environmental Law governs the Administrative Penalty procedure, which does not include revocation as a penalty, simply because revocation is not a true penalty, at most it may be the consequence of a penalty.

Revocation of a legally-granted environmental permit is the result of violation of its conditions or requirements. In other words, if the holder's failure to observe the conditions and requirements which make the permit valid, that results in its nullification. Revocation "*results precisely because those conditions have changed, voluntarily by the individual, as a result of non-compliance with what the same requires*" (Fortes Martín, Antonio: "*Estudio sobre la Revocación de los Actos Administrativos*" [Study of Revocation of Administrative Acts], *Revista de Derecho*, Valdivia, Vol. XIX No. 1, July 2006, pp. 149–177).

To revoke is to nullify a legal act involving power; the idea addressed by authors, such as Sala Arquer, with respect to the objective of revocation, is withdrawal from the legal system of an existing administrative act because it is considered harmful to the public interest (See Sala Arquer, J.M.: "*La revocación de los actos*

administrativos en el Derecho español" ["Revocation of Administrative Acts in Spanish Law"]; pp. 183 and 184); the intent of revocation is to protect the common good, in the case at hand, the common good of the environment.

However, due to the effect of the revocation, the Law needs to ensure that the Administration's power to revoke does not result in excesses that threaten the individual's legal certainty and thus does not destroy confidence in the Salvadoran legal system. As such, the Constitution recognizes the application of due process when there is danger of harming an individual's legal rights.

Among the principles that protect due process is the principle of equality of the parties to the proceeding, which guarantees bilateralness and adversary procedure in litigation, that is, guarantees that the process will be carried out, under the judge's control, between the two parties, with the same conditions for being heard, so the arguments of both parties can be heard and addressed (Vescovi, Enrique: "*Teoría General del Proceso*" [General Theory of Proceedings]; page 54, number 4).

Although it establishes the reasons why the Minister of Environment and Natural Resources may revoke a permit (article 64 of the Environmental Law), the Environmental Law of El Salvador does not establish the legal process that must be applied; however, any act of an authority must be in the light of the Law and the Constitution: the Minister of Environment and Natural Resources must and shall apply the minimum principles of due process. The administrative process must include as minimum guarantees: due communication of the facts under investigation; a reasonable time period for the affected party to defend itself; an evidentiary period during which the submissions are conveyed to the opposing party; equal opportunity to set forth their arguments.

In analyzing the administrative process applied by the defendant, this Court notes that, according to the certificate of the twenty-third of November, two thousand five, the environmental assessment audit was carried out using the procedure, previously described, established in the Regulations of the Environmental Law (initial meeting, verification of compliance and follow-up of the environmental measures proposed in the environmental permit, and the final meeting with the audited party). At the initial meeting, the objective of the resolution was explained; once the audit was concluded, the audited party was advised of its findings, made known to it through the engineer representing the project. A certificate was drawn up, a record was made of its delivery to the representative, and it

[initials]

[seal:] Clerk, Administrative Litigation Chamber
Supreme Court of Justice
Republic of El Salvador, San Salvador
[emblem] [initials]

provided notice of a period of eight business days in which the holder could submit documentation and make clarifications, thus allowing it to challenge the auditor's opinion.

MARN Resolution 3026-003-2006 dated the fourth of January, two thousand six, which has already been analyzed, was issued by the Administration, warning the owner of the San Sebastián Gold Mine Exploitation project of non-compliance with the measures established in the permit and the possibility of additional audits to ensure compliance.

The environmental assessment audit carried out on the twenty-third of June, two thousand six, followed the same procedure as its predecessor, in which similar observations were made, non-conformance with the environmental permit was communicated, and the certificate set forth the holder's right to submit documentation and make clarifications to counter the findings within eight days.

The three acts of governmental authority include protection of due process. The two environmental audit certificates which, according to resolution 3026-003-2006, accompany it, were the means of communication of the investigated circumstances by the administrative authority. The communication made in the certificate to contradict the findings and the eight-day period for submission of evidence guaranteed the plaintiff's right to defense.

The document submitted by Commerce Group Corp. to this Court, attached at page sixty-seven of the record of this proceeding, was issued on the thirtieth of January, two thousand eight, and there was no participation at all by plaintiff in the administrative proceeding submitted by the defendant as grounds for exclusion to justify non-compliance with the environmental measures; consequently the Administration did not have the opportunity to issue an opinion on said argument.

Regarding the plan for closure of operations and rehabilitation: said plan is part of the environmental management program (Article 24 of the Regulations of the Environmental Law) which also includes the environmental impact study. In light of the principles of prevention and precaution, cited and developed at the appropriate time by the defendant, article 21 of the Environmental Law establishes that any activity, construction or project that may have considerable or irreversible impact on the health and wellbeing of the people or the ecosystem, requires, by mandate of law, an environmental impact study.

According to the Environmental Law, the environmental permit requires the holder to take all the actions for prevention, mitigation, or compensation

established in the Environmental Management Program (Article 20 of the Environmental Law). The plan for closure is part of the rehabilitation and compensation process that mining activity, because of the type of activity it is, must submit to the Authority.

The Minister of Environment and Natural Resources complied with the principles of due process prior to revoking MARN environmental permit No. 492-2002, respecting the right of the affected party to a hearing and defense. In turn, the defendant, in compliance with the principle of legality, was right to request the plan for closure of operations and rehabilitation, as required by the Environmental Law.

Therefore, this Court holds that MARN administrative act 3026-783-2006, issued on the sixth of July, two thousand six by the Minister of Environment and Natural Resources, is a legal act.

II. RULING

CONSEQUENTLY, based on the foregoing and article 64 a) of the Environmental Law, articles 421 and 427 of the Code of Civil Procedure, articles 31, 32, and 53 of the Administrative Jurisdiction Law, in the name of the Republic, this Court **DECIDES**:

- a)** To declare legal the act issued by the Minister of Environment and Natural Resources on the sixth of July, two thousand six.
- b)** To order Commerce Group Corporation to pay court costs in accordance with the law.
- c)** In the notification, to order that certification of this ruling be provided to the parties and the Office of the Attorney General.
- e)** [sic] To order that, at the proper time, the administrative file be returned to its office of origin.

Let notice be issued: **Amended: to-of-party-Valid.**

"M. POSADA" "L.C. DE AYALA G." "M.A. CARDOZA A." "E.R. NÚÑEZ." HANDED DOWN BY THE UNDERSIGNED JUDGES. "ILLEGIBLE." CLERK.

THIS MATCHES ITS ORIGINAL, to which it was compared, and for delivery to the **MINISTER OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES**, this **CERTIFICATION** is issued, signed and sealed, on six pages of text, in the office of the Clerk of the Administrative Litigation Chamber of the Supreme Court of Justice; San Salvador, 8:15 a.m. on the twenty-ninth of April, two thousand ten.

[seal:]
Clerk, Administrative Litigation Chamber
Supreme Court of Justice
Republic of El Salvador, San Salvador
[emblem] [initials]

[signature]
MIGUEL ÁNGEL CEDILLOS ARÉVALO
Clerk
Administrative Litigation Chamber